

20 de julio de 2022

El Honorable Antony J. Blinken
Secretario de Estado
Departamento de Estado de EE.UU.
2201 C. St., NW
Washington, DC 20520

Estimado Secretario Blinken:

Escribimos para expresar nuestro apoyo a la Resistencia Pacífica La Puya y su lucha legítima para defender el agua y la salud de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en Guatemala de las acciones del proyecto minero *Progreso VII Derivado*, propiedad de la empresa estadounidense de Nevada Kappes, Cassidy & Associates (KCA). También escribimos para compartir nuestras preocupaciones sobre la posibilidad de que se renueve la agresión contra el movimiento en relación con la demanda de arbitraje internacional de KCA en curso y el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional. Solicitamos el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para garantizar una respuesta eficaz en caso de cualquier agresión o represión contra los defensores de la tierra, o en caso de esfuerzos para manipular el proceso de consulta.

KCA empezó a invertir en el proyecto *Progreso VII Derivado* en 2008 y se convirtió en su único inversionista en agosto de 2012, en medio de la preocupación creciente de las comunidades por la posibilidad de que el proyecto minero disminuya y contamine aún más las ya escasas reservas de agua. A pesar de la agresión en su contra por parte de empleados de la mina, seguridad privada y la policía, las y los defensoras/es de las comunidades afectadas se han organizado como la Resistencia Pacífica La Puya y han mantenido un campamento de protesta en la entrada de la mina del proyecto desde el 2 de marzo de 2012.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió que KCA suspendiera sus operaciones mineras por falta de consulta previa con las comunidades afectadas. Por esta y otras razones, KCA ahora está demandando a Guatemala bajo los términos del Tratado de Libre Comercio entre los EEUU, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA) por más de \$400 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje supranacional, el cual es una rama del Banco Mundial, llamado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Nos preocupa que las empresas mineras recurran cada vez más a este tipo de arbitraje cuando sus proyectos están bloqueados como consecuencia de la legítima oposición de los pueblos que buscan defender su agua, un medio ambiente sano y sus derechos a la tierra y a la autodeterminación.

La defensa legal del gobierno de Guatemala en el arbitraje esboza muchas de las preocupaciones planteadas por la Resistencia Pacífica La Puya y reconoce la legitimidad de su lucha. El documento escrito del gobierno incluye cómo la inversión de la empresa *augmentó* después de que la comunidad instaló su plantón permanente, y cómo después la empresa, en

coordinación con la policía nacional, utilizó la intimidación y amenazas en sus varios intentos de dismantelar la resistencia comunitaria. También hace amplia referencia a las pruebas de la ilegalidad del proyecto de KCA, que La Puya ha denunciado durante años. Esto incluye que la Evaluación de Impacto Ambiental de la empresa era tan incompleta y deficiente que "no debería haber sido aprobada"¹, que la empresa violó alrededor del 50% de sus obligaciones ambientales, y carecía de la licencia municipal de construcción necesaria y, como resultado, operó ilegalmente desde el principio.

Deseamos comunicar nuestro apoyo a los legítimos esfuerzos de la Resistencia Pacífica La Puya para proteger los suministros críticos de agua y la salud de sus comunidades. A pesar de la represión violenta, la incansable resistencia pacífica de las y los defensoras/es de la tierra está influyendo, de varias maneras, a la defensa legal del gobierno en su disputa con KCA. Es imperativo que estas comunidades no se enfrenten a más actos de agresión, represión policial o persecución legal. Seguimos preocupados por la seguridad de los miembros de la Resistencia Pacífica La Puya y estaremos atentos al avance del proceso de arbitraje.

Asimismo, estamos al tanto del inminente inicio de un proceso de consulta sobre el proyecto *Progreso VII Derivado* encabezado por el Ministerio de Energía y Minas y basado en la orden de la Corte Constitucional, expedientes 3207-2016 y 3344-2016. Estos procesos de consulta deben llevarse a cabo con el máximo respeto al derecho de las comunidades a participar de manera libre y segura. Varias de nuestras oficinas escribieron anteriormente para expresar nuestra preocupación sobre los informes del Estado de Excepción en el Municipio de El Estor², mientras un proceso de consulta similar ordenado por la corte estaba en curso. Esa declaración otorgó a los militares poderes especiales para aplicar un estricto toque de queda, realizar detenciones y allanamientos de casa sin orden judicial y suspender garantías constitucionales básicas, todo lo cual no favorece un proceso de consulta en buena fé.

Al igual que la situación de las y los defensoras/es de la tierra en El Estor, los integrantes de la Resistencia Pacífica La Puya han sufrido intimidación, criminalización y agresiones durante años. Siendo conscientes de que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala está prestando mucha atención a este y otros proyectos mineros en el país, hacemos un llamado al Departamento de Estado para que la embajada abogue por la plena participación de las comunidades sin temor a represalias y se pronuncie ante cualquier caso de agresión o represión contra las y los defensoras/es de la tierra. Asimismo, debe expresar públicamente y a través de los canales diplomáticos su apoyo a la plena participación de las comunidades más afectadas por el proyecto minero de KCA durante todo el proceso de consulta y con pleno respeto a la decisión de la Corte Constitucional.

Finalmente, con base en las evidencias de las ilegalidades del proyecto minero de KCA

1 ICSID Case No. ARB/18/43, Guatemala's Counter-Memorial, December 7, 2020.

2

https://chuygarcia.house.gov/sites/chuygarcia.house.gov/files/wysiwyg_uploaded/Guatemala%20State%20of%20Exception%2011-30-2021_0.pdf

contenidas en el escrito de defensa legal del gobierno presentado ante el panel del CIADI, exhortamos a la Embajada de EE.UU. en Guatemala a abstenerse de prestar apoyo a la empresa en caso de que lo solicite. Además, pedimos información sobre la debida diligencia o salvaguardas que tiene el Departamento de Estado para evitar prestar servicios a una empresa cuando ésta actúe sin respetar la ley, las protecciones medioambientales, y el consentimiento libre, previo e informado de los afectados.

Atentamente,

Firmado por:

Jesús G. "Chuy" García
Miembro del Congreso

James P. McGovern
Miembro del Congreso

Jamaal Bowman, Ed.D.
Miembro del Congreso

Ilhan Omar
Miembro del Congreso

Cori Bush
Miembro del Congreso

Mark Pocan
Miembro del Congreso

Joaquin Castro
Miembro del Congreso

Jan Schakowsky
Miembro del Congreso

Raúl M. Grijalva
Miembro del Congreso

Rashida Tlaib
Miembro del Congreso

Pramila Jayapal
Miembro del Congreso

Norma J. Torres
Miembro del Congreso